

El impacto y el temor por la decisión de EE. UU. de frenar y revisar la ayuda a Colombia

A las cero horas del jueves 30 de enero, el Ejército de Colombia y la Policía Nacional fueron notificados de que quedó suspendida la ayuda de Estados Unidos para la operación de la flota de 64 helicópteros Black Hawk que se usan en la lucha contra bandas criminales, narcotráfico, minería ilegal y hasta para evacuar víctimas del conflicto, como sucede en el Catatumbo.

La medida, que dejó en tierra aparatos artillados clave para el movimiento de tropa y para la guerra que se libra contra la criminalidad (incluido el Eln y las disidencias de las Farc), es consecuencia de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de suspender, reevaluar y realinear la ayuda exterior de su país.

Paz, JEP y FF. MM.

Algunos sectores le restaron importancia a la medida bajo el argumento de que Colombia es uno más en la lista de países que deberán esperar 90 días para que Washington decida si mantiene la ayuda que viene entregando.

Además, dicen que a Estados Unidos le conviene seguir apoyando la lucha contra el narcotráfico y la migración ilegal, y que ya se había aplicado una revisión similar en el pasado.

Pero, en una especie de efecto dominó, se han empezado a conocer las consecuencias de la revisión y pausa del apoyo dentro de un nuevo contexto: la tensa relación entre el gobierno Trump y el presidente Gustavo Petro por cuenta de los vuelos con connacionales deportados que el mandatario colombiano no dejó aterrizar en Bogotá.

Aunque el domingo pasado se dio por superada la crisis y se reactivaron las citas para otorgar visas a colombianos, sigue el intercambio de declaraciones por fuera de la diplomacia.

Y si bien el congelamiento de la ayuda -que en 2024 ascendió a 400 millones de dólares para Colombia- se ordenó antes del incidente, sus efectos coincidieron con la crisis del domingo y la preocupación de varios sectores.

Los primeros afectados fueron proyectos eje para la implementación del acuerdo de paz con las Farc a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Luego siguieron con algunas ONG que desarrollan programas de formalización de tierra, medioambiente e inclusión. Y más tarde, el turno fue para la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Todas son financiadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo



UNIDAD INVESTIGATIVA

U.INVESTIGATIVA@ELTIEMPO.COM | X @UinvestigativaET

Tensión con gobierno Petro, narcohectáreas en alza y metas de erradicación en rojo afectarían reactivación rápida de apoyos e incluso montos. Ejército, Policía y seguridad, los más golpeados.



A la baja en el pie de fuerza y al debilitamiento de la inteligencia se unen la pausa y la revisión de la ayuda de EE. UU. a la Fuerza Pública. Horas de vuelo de Black Hawk y seguridad del país, los más golpeados. FOTO: EL TIEMPO

llo Internacional (Usaid).

“Esa agencia es el brazo blando de Estados Unidos en la lucha antidrogas e incluso contra minas antipersona. La afectación es grande y grave”, le señaló a EL TIEMPO Carlos Charry, director de la maestría y doctorado de Estudios Sociales de la Universidad del Rosario.

Black Hawk, en tierra

Pero la notificación que terminó aterrizando a los escépticos sobre la dimensión de la orden ejecutiva de Trump les llegó a las Fuerzas Militares, que aún no han terminado de calcular los efectos colaterales de la medida en la seguridad del país y en la lucha contra diferentes mafias.

Por los lados del Ejército salieron a decir que con su personal pueden seguir operando los helicópteros Black Hawk. Pero, en privado, admitieron que si la pausa en las ayudas se prolonga, se podría generar una crisis que impactaría aún más el deteriorado orden público del país en regiones como Cauca, Valle, Arauca, Catatumbo y algunos sectores de Antioquia.

De hecho, EL TIEMPO re-

400

MILLONES DE DÓLARES

Monto de la ayuda que Estados Unidos le aprobó a Colombia para la vigencia fiscal 2024. Hubo recorte con relación a 2023.

veló que se creó una comisión especial para definir qué personal mueven a la base militar de Tolemaida para que se haga cargo de los roles que antes financiaban los estadounidenses.

“Hay que comisionar oficiales de otras operaciones clave para que asuman temporalmente las que se cubrían con contratistas pagados por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Pero el deterioro del orden público se va a empezar a sentir en esas zonas donde movamos personal”, le dijo a EL TIEMPO uno de los oficiales a los que llamaron a Tolemaida.

Policía, la más afectada

EL TIEMPO también reveló el impacto de la medida ordenada por Trump en la Policía con la cancelación de más de mil comisiones al exterior y parte de la flota de helicópteros en tierra.

De hecho, también se convocó una reunión de emergencia para no frenar la lucha antidrogas desde la Dirección Antinarcóticos.

Y si bien horas más tarde sacaron un comunicado señalando que podrían seguir operando 14 Black Hawk, 10 de ellos pertenecientes a la institución y 4 del programa de cooperación con Estados Unidos, la realidad es que el mantenimiento y operación de su flota de helicópteros está contratado directamente por la Sección de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos y Aplicación de la Ley (INL, por su sigla en inglés).

“Trump, transaccional”

Y hay otro lío. Como lo reveló a mitad de semana este diario, las cifras de la lucha contra el narcotráfico, que se apoyan en la ayuda del Gobierno de Estados Unidos, están en rojo. La meta de erradicación forzosa, fijada muy por debajo de la de años anteriores, no

se cumplió. Era de 10.000 hectáreas y se alcanzaron 9.403, la más baja de la última década. Y aunque el presidente Petro señaló como uno de los grandes logros de su gobierno en 2024 la incautación de 849 toneladas de cocaína, la cifra está ligada directamente a que están creciendo las hectáreas de narcocultivos. Van 253.000 hectáreas, lo que pone a Colombia en el deshonroso pódium del principal productor de cocaína y en la mira de una descertificación.

“Trump es una persona transaccional y necesita recibir para dar. Bajo su percepción, Colombia no le da lo que él necesita, por ejemplo, con los bajos resultados en temas de erradicación de cultivos ilícitos o incluso lo que pasó con los vuelos de los deportados”, le dijo a EL TIEMPO Eduardo Velosa, director de la maestría en Estudios Internacionales de la Universidad Javeriana.

Y sobre la incidencia de las metas en rojo de erradicación de hectáreas de cultivos de coca en el contexto de la ayuda, el investigador de conflictos armados Néstor Rosanía hace un análisis preocupante.

Fantasma del glifosato

“Se podría venir una disputa por las estrategias en la lucha antinarcóticos. Es probable que se dé una confrontación por el uso del glifosato, que el gobierno Trump apoya. En Colombia, por el contrario, su uso está vetado por la Corte Constitucional y el gobierno Petro se ha enfocado más en la sustitución y no en la erradicación”, explicó Rosanía.

Sin embargo, no cree que la suspensión de la ayuda se extienda indefinidamente.

“Después de 90 días, lo más probable es que ambos gobiernos entren a negociar con políticas que beneficien a Washington. Estados Unidos está implementando una política de disuasión para posicionarse y exigir”, señaló Rosanía.

Pero otra cosa piensa Carlos Charry: “La tensa relación entre el presidente Gustavo Petro y el Gobierno de Estados Unidos, sumado a las bajas metas de erradicación de cultivos ilícitos, sin lugar a dudas va a afectar la reactivación de las ayudas”.

Para el analista, Estados Unidos seguirá utilizando la misma estrategia que aplicó con los deportados: “Si no cumples lo que digo, te quito determinadas ayudas. Incluso me atrevo a decir que por lo fracturadas que quedaron las relaciones, a pesar del trabajo profesional de funcionarios de Cancillería por restablecerlas, la comunicación entre los dos países se dificultará y afectará las ayudas”.

Sobre ese último tema, el gobierno Petro no ha fijado aún su postura.

Pero miembros del gabinete dan por descontado que se eche mano de una especie de diplomacia paralela para destrabar el apoyo y conservar los montos.

De hecho, la tragedia que se vive en el Catatumbo, donde el Ejército tuvo que pedir prestados helicópteros a Ecopetrol para mover tropa y evacuar civiles desplazados, podría ayudar a acelerar la reactivación de ayudas y a bajar la temperatura de las tensas relaciones.